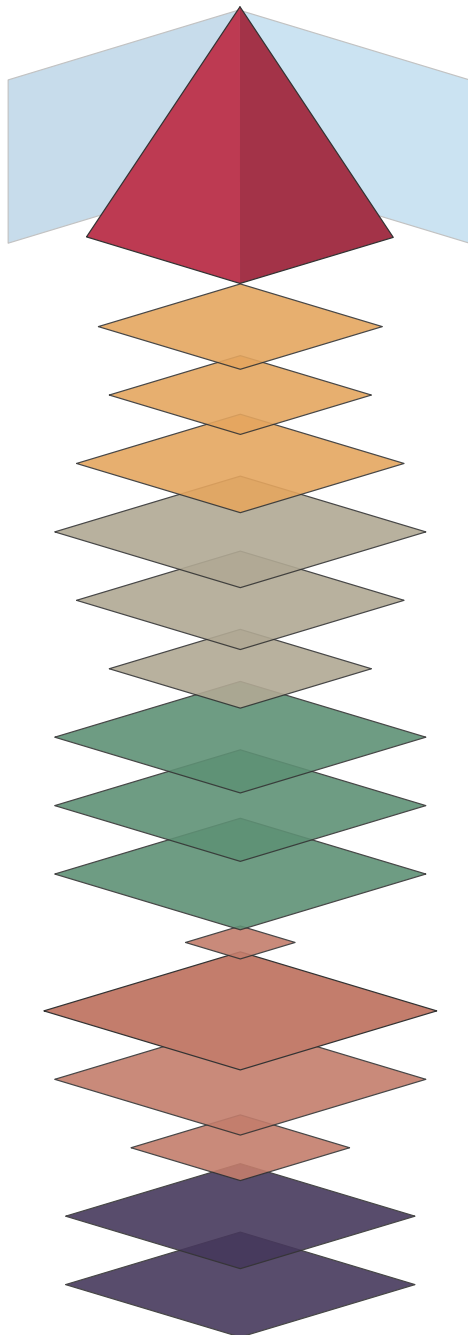




BRASIL



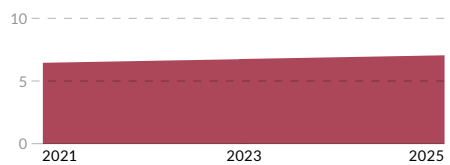
7.07 $\nearrow 0.30$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

14.º de 193 pays $\nearrow 8$

6.º de 35 países americanos $\nearrow 1$

4.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES 7.23 $\nearrow 0.30$

TRATA DE PERSONAS	6.50 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE PERSONAS	6.00 $\nearrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	7.50 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE ARMAS	8.50 0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	7.50 $\nearrow 0.50$
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	6.00 $\nearrow 1.00$
DELITOS CONTRA LA FLORA	8.50 0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	8.50 0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	8.50 0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	2.50 0.00
COMERCIO DE COCAÍNA	9.00 0.00
COMERCIO DE CANNABIS	8.50 0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	5.00 $\nearrow 0.50$
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	8.00 0.00
DELITOS FINANCIEROS	8.00 $\nearrow 1.00$



ACTORES CRIMINALES 6.90 $\nearrow 0.30$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	8.00 0.00
REDES CRIMINALES	7.00 0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8.50 0.00
ACTORES EXTRANJEROS	4.00 $\nearrow 0.50$
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	7.00 $\nearrow 1.00$



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.

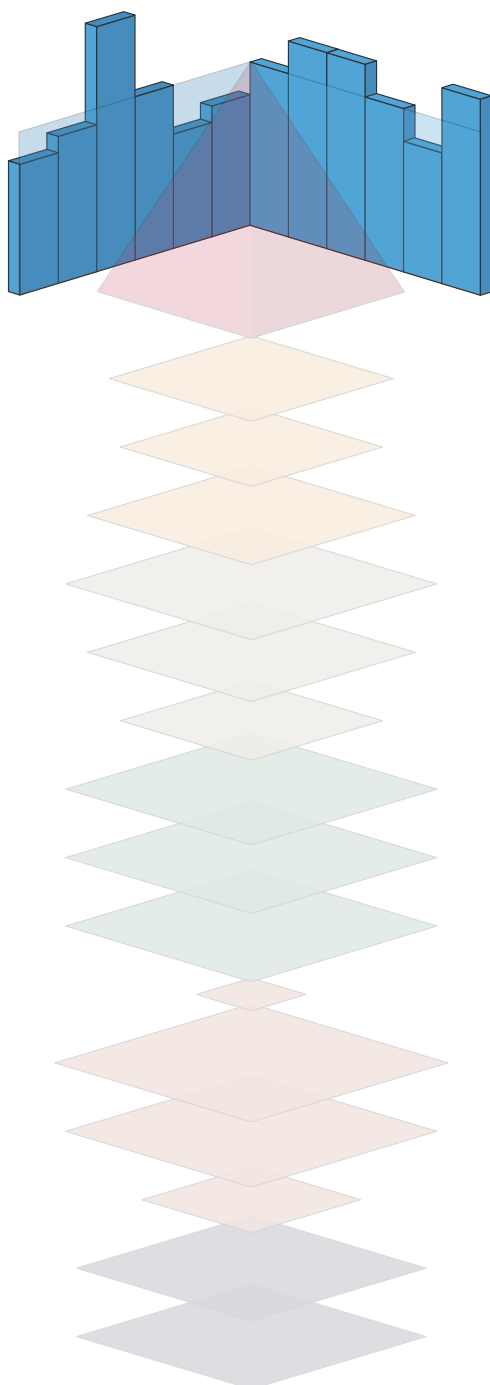


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por
la Unión Europea e implementado por el
Institute for Security Studies e INTERPOL,
en asociación con Global Initiative Against
Transnational Organized Crime.



BRASIL



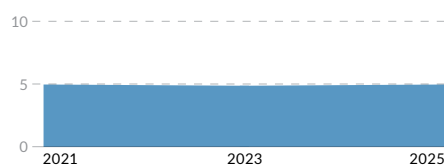
5.04 $\nearrow 0.12$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

86.º de 193 países $\nearrow 8$

17.º de 35 países americanos $\nearrow 1$

5.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4.00	$\nearrow 1.00$
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4.50	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7.50	0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	5.00	$\nearrow 0.50$
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3.50	$\nearrow 0.50$
CUERPOS DE SEGURIDAD	4.00	$\searrow 0.50$
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5.00	$\searrow 0.50$
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6.00	0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6.00	$\nearrow 0.50$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.00	0.00
PREVENCIÓN	4.00	0.00
ACTORES NO ESTATALES	6.00	0.00



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Brasil es un país tanto de origen como de destino para la trata de personas y se explota a sus víctimas para ejercer la prostitución y hacer trabajos forzados. Las víctimas brasileñas interesan a las organizaciones criminales nacionales y las internacionales y se suelen encontrar en las redes de trata en España y en Italia. En Brasil se explota a las víctimas procedentes de otros países, sobre todo Bolivia, Venezuela, Haití, Paraguay, Filipinas y China. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la trata con fines sexuales, en especial en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. La contratación fraudulenta para oportunidades laborales en el Sudeste Asiático ha dado lugar a trabajos forzados en operaciones de estafa cibernética en Camboya y China. El tráfico de mano de obra es muy frecuente en Brasil. En los centros urbanos, se esclaviza a los trabajadores brasileños y los extranjeros en la construcción, las fábricas, los restaurantes y la industria hotelera. El trabajo forzoso también está muy extendido en la producción de caña de azúcar, la minería, la tala, las fábricas textiles y la producción de vino, así como en el servicio doméstico, donde afecta especialmente a las mujeres y los niños migrantes. Los niños brasileños son vulnerables a la adopción clandestina y a la venta a compradores extranjeros, así como al turismo sexual infantil.

Brasil es un centro importante del tráfico de personas en la región, principalmente como país de tránsito para personas procedentes, sobre todo, de Venezuela y de Haití, que se desplazan por América del Sur. En los últimos años, también se ha convertido en un lugar de paso para migrantes clandestinos de Asia del Sur, en particular hombres procedentes de Vietnam, India y Nepal, que se dirigen a Estados Unidos. Siguiendo las instrucciones de los coyotes, estas personas viajan por Europa o por Asia Occidental hasta llegar a Brasil. Desde allí emprenden una peligrosa ruta desde Acre hasta Perú, atravesando América del Sur y América Central a través de Panamá y navegando por el peligroso Tapón del Darién para llegar a México. El viaje continúa a través de México hasta Estados Unidos. Los migrantes clandestinos de Asia del Sur también entran en Brasil por su frontera norte con Guyana. Las redes de tráfico de personas de Asia del Sur suelen operar dentro de sus propios países y atraen a las personas con falsas promesas de trabajo en Brasil, antes de someterlas a servidumbre por deudas o a condiciones de trabajo similares a la esclavitud.

La extorsión y los cobros ilegales por protección están muy arraigados, especialmente en los centros urbanos, donde las milicias respaldadas por la Policía cobran por prestar protección. Aprovechan los recursos policiales para obligar a pagar, en prácticas de extorsión dirigidas a mineros,

empresarios, políticos locales y residentes. Aunque los grupos mafiosos más influyentes de Brasil, como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), dominan especialmente este mercado criminal, se sabe que se abstienen de involucrar a los ciudadanos de a pie.

TRÁFICO

El tráfico de armas es importante en Brasil, ya que el país es tanto un consumidor como un lugar de tránsito de armas de fuego ilícitas. Las armas se obtienen principalmente mediante el robo de los arsenales estatales y de propietarios privados y los agentes de Policía suelen actuar como intermediarios. Los grupos delictivos, como el PCC y el CV, adquieren armas, a menudo utilizando empresas legítimas que las importan de Croacia, Turquía, Eslovenia y Estados Unidos y utilizan a Paraguay como un lugar de tránsito clave. El aumento de la posesión legal de armas de fuego durante el Gobierno anterior agravó el comercio ilícito de armas, ya que las facciones criminales aprovecharon las lagunas normativas para adquirir rifles semiautomáticos. De hecho, las organizaciones criminales utilizaron estas lagunas para comprar armas legalmente, a través de personas sin antecedentes penales.

El mercado de productos falsificados se ha expandido y la industria de las bebidas alcohólicas se ha visto particularmente afectada en los últimos años. Una parte significativa de las bebidas destiladas que se producen en el país ahora se fabrican ilegalmente, una tendencia que ha crecido mucho en los últimos años, debido a los altos impuestos que gravan la industria nacional y a la devaluación del real brasileño. La ropa, los medicamentos, los productos agroquímicos y los electrónicos también se falsifican con frecuencia, con cadenas de suministro vinculadas a China, Paraguay y Guyana. Las redes criminales, incluidos los narcotraficantes, están involucradas sobre todo en el comercio de productos agroquímicos falsificados. Estas redes controlan las rutas de contrabando de Paraguay a Brasil y transportan pesticidas falsificados junto con las drogas, mientras que los productos procedentes de los vecinos del norte entran por puertos fluviales, como Belém, y los destinados a Bolivia llegan por carretera. Los productos falsificados también se fabrican a nivel nacional en ciudades brasileñas, como Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto y Goiânia.

El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, en particular los cigarrillos, sigue siendo un problema importante en Brasil, debido a factores como las políticas fiscales y la aceptación social de los productos de contrabando. Brasil desempeña un papel clave en el comercio ilícito de tabaco, especialmente en la región de la triple frontera con Paraguay y Argentina, por donde se introducen de contrabando en Brasil la mayoría de los

cigarrillos paraguayos. Este comercio está profundamente entrelazado con el lavado de dinero, la corrupción política y las actividades de las bandas en la región. Algunas organizaciones criminales, como el PCC, están cada vez más activas en este mercado tan lucrativo y reinvierten las ganancias de la droga en cigarrillos de contrabando, mientras que las milicias de Río de Janeiro se benefician de la venta de cigarrillos irregulares en sus territorios. En las ciudades brasileñas, los cigarrillos ilegales se suelen vender más que los legales, por la importante diferencia de precio. Los contrabandistas se han adaptado a las medidas de control y han desarrollado rutas complejas a través de varios países, como Bolivia, Surinam y Panamá, y recurren a puertos clandestinos, donde las redes criminales suelen convencer a los trabajadores para que eludan las inspecciones. Los cigarrillos electrónicos también se han convertido en un segmento cada vez mayor del mercado ilícito, especialmente en la zona fronteriza con Argentina, Brasil y Paraguay, a pesar de que su venta no está autorizada en Brasil. Se han incautado millones de cigarrillos electrónicos en todo el país, pero la demanda sigue aumentando y millones de brasileños utilizan productos no regulados.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal y la deforestación causan graves perjuicios económicos y ecológicos y solo las pérdidas derivadas de la deforestación del Amazonas se estiman en miles de millones de dólares anuales. Algunas especies madereras de gran valor, como el palo de Brasil y el ipê, se trafican hacia América del Norte, Europa y China, a menudo mediante documentación fraudulenta. Las organizaciones criminales, como el PCC y el CV, se dedican a la tala, el acaparamiento de tierras y la corrupción política, para mantener el control de las cadenas que suministran la madera. El desmantelamiento de las agencias de protección medioambiental e indígena por parte de la administración anterior empeoró la situación y creó un vacío de poder que ocuparon las organizaciones criminales. Aunque la administración actual ha introducido mejoras en las políticas destinadas a reducir la deforestación, lo que ha dado lugar a algunos avances iniciales, siguen existiendo retos sistémicos. Sigue habiendo connivencia entre los funcionarios corruptos y los actores criminales, lo que socava la plena eficacia de estas reformas. Los delitos contra la fauna son endémicos y Brasil es un país de origen para el comercio ilegal de especies silvestres. Los loros, los peces exóticos y las especies en peligro de extinción, como los guacamayos de Lear y los titíes león dorado, se trafican internacionalmente, a menudo a través de Surinam, Guyana y Perú. Cada año, se capturan ilegalmente en Brasil millones de animales, de los cuales alrededor del 90 % muere durante la captura y el transporte, mientras que solo el 10 % llega al consumidor final, lo que pone de relieve la crueldad de este comercio. Se estima que Brasil representa entre el 5 y el 15 % del tráfico mundial de especies silvestres. Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para los traficantes, ya que les permite llegar a un público amplio, sin revelar su identidad. Las plataformas digitales han impulsado el aumento de este tráfico y las grandes incautaciones

revelan cada vez más vínculos entre las redes criminales y los compradores internacionales. Estos animales se vendían principalmente a través de las redes sociales, a menudo acompañados de documentos falsos.

La minería ilegal sigue estando muy extendida en Brasil. La extracción de oro, especialmente en los territorios yanomami y tapajós, es impulsada por los elevados precios mundiales, el escaso cumplimiento de la ley y las sofisticadas operaciones de contrabando. La cadena de suministro de oro de Brasil carece de transparencia, lo que permite que el oro extraído ilegalmente entre en la economía legal. El aumento de los precios del oro en los cinco últimos años, sumado al escaso cumplimiento de la ley y a un mercado mal regulado, ha agravado el problema. Las estimaciones sobre la cantidad de mineros ilegales en los territorios indígenas amazónicos oscilan entre los 4 000 —esta es la cifra oficial— y los 20 000 (según las oenegés y los líderes indígenas). Otros recursos extraídos ilícitamente son los diamantes, la casiterita y el tantalio, con redes de contrabando transfronterizo vinculadas a Venezuela, Guyana y Colombia. El tráfico de arena también se ha convertido en un delito lucrativo, especialmente a lo largo del río Preto, en São Paulo, en las zonas controladas por las milicias de Río de Janeiro y en Bahía y Paraíba.

DROGAS

Brasil es un importante centro del comercio mundial de cocaína, porque está situado cerca de los principales países productores de drogas y dispone de amplias redes de transporte. La región amazónica se ha convertido en un punto de entrada fundamental y los traficantes utilizan sus ríos para transportar los cargamentos hacia los puertos del Atlántico, para su exportación, principalmente a Europa. Las incautaciones de cocaína han aumentado bastante y las autoridades han interceptado grandes cargamentos a lo largo del año. Para el contrabando se suelen utilizar puertos y aviones privados y las redes criminales internacionales colaboran con los grupos brasileños para facilitar el tráfico. Cuando se ha intentado aplicar la ley, ha habido detenciones y confiscaciones de bienes, pero el comercio sigue estando muy activo. La cocaína se transporta a través de dos rutas principales: una incorpora los envíos a las exportaciones agrícolas y la otra aprovecha la escasa vigilancia en el Amazonas. Las organizaciones criminales dominan el comercio y utilizan redes en expansión para transportar drogas a nivel internacional. Brasil también es uno de los mayores consumidores de cocaína y crack y tiene un mercado interno muy extendido, controlado por las organizaciones criminales. El tráfico de drogas alimenta la violencia y está vinculado a otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y el robo de vehículos. Los grupos criminales siguen ampliando su alcance y utilizan rutas alternativas y sociedades para no cumplir la ley.

Brasil es un gran consumidor de cannabis, que procede sobre todo de Paraguay, aunque el cultivo nacional está aumentando. El comercio de cannabis desempeña un

papel fundamental en la financiación de las organizaciones criminales, especialmente en los centros urbanos. La mayor parte de la marihuana que se consume en Brasil es de baja calidad y a menudo se transporta comprimida, para que pase desapercibida, pero está aumentando la demanda de cannabis de mejor calidad, como las variedades importadas. Los consumidores más adinerados impulsan la demanda de productos de primera calidad procedentes de Europa, África y Estados Unidos. Los grupos delictivos involucrados en el comercio de cocaína, como el PCC y el CV, también controlan la distribución de la marihuana, utilizando los mismos canales que el comercio de la cocaína, con una producción gestionada por organizaciones paraguayas y colombianas. Los intentos de hacer cumplir la ley han afectado las operaciones de las redes criminales, pero la marihuana sigue siendo muy accesible y su precio varía según la región.

En Brasil está aumentando la incautación de drogas sintéticas, en particular de fentanilo, que se produce cada vez más en el país y se distribuye a través de los servicios postales. El fentanilo, que a menudo se mezcla con otras sustancias, plantea riesgos desconocidos para los consumidores. Las drogas sintéticas, como el éxtasis, la cocaína rosa y la ketamina, son cada vez más frecuentes, especialmente en la cultura de las fiestas. El país desempeña un papel clave en las redes internacionales de contrabando, ya que las materias primas entran por los puertos, los aeropuertos y las fronteras terrestres. Algunas drogas sintéticas se desvían de fuentes farmacéuticas o se introducen de contrabando desde México, lo que pone de relieve los vínculos entre las organizaciones criminales latinoamericanas. Los cuerpos de seguridad y las instituciones de investigación están trabajando para mejorar las medidas de detección y de prevención. Según los informes, ha habido un aumento general de las incautaciones de drogas sintéticas y las sobredosis, en un panorama de drogas en constante evolución.

El mercado de la heroína en Brasil es limitado. No es una droga habitual en las calles y rara vez se consume, debido a su elevado coste y a su escasa disponibilidad en el mercado.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

En Brasil están aumentando los delitos cibernéticos y cada vez se producen más ataques dirigidos a particulares y a empresas. A principios del 2024, una importante filtración de datos expuso información confidencial sobre millones de personas y el ransomware y los troyanos bancarios son amenazas persistentes. El país es un objetivo clave para los ciberataques en América Latina, ya que representa una parte significativa de los incidentes regionales. Los troyanos bancarios originarios de Brasil han llegado a dominar el panorama mundial y han llenado el vacío que han dejado los ciberdelinquentes de Europa del Este, que se han pasado al ransomware. Las empresas denuncian frecuentes violaciones de seguridad, que a menudo les impiden acceder a datos

fundamentales. Prosiguen los esfuerzos para contrarrestar las amenazas cibernéticas, pero las vulnerabilidades siguen estando muy extendidas en todos los sectores.

DELITOS FINANCIEROS

En Brasil, los delitos financieros están muy extendidos y abarcan la corrupción, la evasión fiscal, la malversación y el fraude. El fraude fiscal sigue siendo significativo y los flujos ilícitos mal facturados representan una parte considerable del PIB. Las autoridades han desmantelado tramas que implicaban a empresas ficticias y declaraciones fraudulentas del impuesto sobre la renta. El fraude en materia de inversiones también ha aumentado y afecta a los fondos de pensiones, los inversores y los organismos estatales de desarrollo. Los delitos financieros propiciados por la cibernética, como la usurpación de identidad, las estafas en línea y el fraude financiero, son cada vez más frecuentes y muchas de estas tramas se gestionan desde las prisiones. El fraude financiero ha tenido un impacto significativo en diversos sectores, como el comercio minorista, el comercio electrónico y los seguros, con pérdidas por valor de más de 1 500 millones de dólares estadounidenses, a causa de estafas producidas durante el período que abarca el informe. Las aplicaciones de juego fraudulentas y las estafas de phishing se aprovechan de los ciudadanos. Estos flujos financieros ilícitos alimentan el crimen organizado.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado en Brasil está dominado por los grupos PCC y CV, que se han expandido más allá de las prisiones hacia operaciones transnacionales. Se dedican al tráfico de drogas y de armas, el contrabando, el lavado de dinero y la minería ilegal y colaboran con organizaciones criminales extranjeras de América Latina, Europa y África. El PCC opera como una red descentralizada, mientras que el CV mantiene una estructura jerárquica con control territorial. Ambos grupos reclutan en las prisiones y ejercen influencia política a través de la corrupción y el lavado de dinero. Sus actividades desestabilizan las regiones urbanas y las fronterizas y aumentan la violencia y los delitos económicos. Los cuerpos de seguridad se enfrentan a retos constantes, ya que estos grupos se consolidan en las redes internacionales de narcotráfico, los sistemas financieros y las estructuras de gestión.

El problema del crimen organizado se agudiza en Brasil, ya que hay numerosas facciones criminales que operan tanto dentro como fuera de las cárceles. Estos grupos presentan diversas estructuras y grados de fluidez. Las redes criminales están ampliando sus actividades en la región amazónica, lo que ha intensificado la violencia y reforzado las conexiones transnacionales, especialmente en el tráfico de drogas y en los delitos ambientales. Aparte de los estupefacientes, las redes criminales se dedican a la minería ilegal, el tráfico

de armas, el robo de bancos y el lavado de dinero. Muchas mantienen alianzas con figuras políticas y utilizan fondos ilícitos para influir en las elecciones.

En todo el país, hay funcionarios estatales, miembros de los cuerpos de seguridad, militares y civiles que forman grupos que se benefician de una variedad de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la minería, los delitos ambientales y los financieros. Las milicias paramilitares brasileñas, compuestas principalmente por miembros actuales y antiguos de las fuerzas de seguridad, son los actores criminales integrados en el Estado más influyentes. También se han convertido en actores predominantes y superan a las bandas tradicionales en cuanto al control territorial. Se concentran en las zonas marginales de Río de Janeiro y ejercen una autoridad de facto, extorsionan a los residentes y monopolizan servicios, como los suministros públicos, el transporte y el sector inmobiliario. Gracias a la connivencia de otros funcionarios estatales, estos grupos eluden a los cuerpos de seguridad y, al mismo tiempo, se infiltran en las instituciones políticas e influyen en los resultados electorales. Algunas milicias se han aliado recientemente con narcotraficantes y se han expandido al comercio de drogas. Su capacidad para ejercer la violencia y convencer a las estructuras administrativas pone de relieve su arraigo sistémico, lo que las convierte en un motor clave en el panorama del crimen organizado en Brasil y en un factor significativo de los altos niveles de violencia que persisten en el país.

El panorama del crimen organizado está profundamente ligado a las organizaciones criminales extranjeras que colaboran o compiten con los grupos nacionales, como el PCC y el CV.

Las mafias italianas (en particular la 'Ndrangheta) y las redes balcánicas facilitan el tráfico transnacional de drogas y de armas, el lavado de dinero y las disputas territoriales. Las bandas venezolanas aprovechan las rutas migratorias, para expandirse hacia las regiones del norte de Brasil y forman alianzas para el tráfico de drogas y de oro y también para la explotación de personas. Hay grupos peruanos y bolivianos que, junto con algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, establecen rutas de suministro de cocaína hacia Brasil. La mafia nigeriana, la china y la albanesa se dedican a diversas actividades ilícitas, desde delitos financieros hasta la extracción ilegal de recursos. Las diásporas desempeñan un papel clave en los mercados de las falsificaciones y en las mafias del transporte público, lo que refleja los vínculos económicos y delictivos entre Brasil y los actores globales vienen de lejos.

El sector privado de Brasil facilita el lavado de dinero a gran escala y los flujos financieros ilícitos. Las organizaciones criminales introducen fondos ilegales en sectores legítimos, como el transporte público, la agricultura y la salud. Las investigaciones revelan que los operadores de autobuses, los proveedores de los hospitales y las empresas de recambios de automóviles actúan como canales para el lavado de las ganancias ilícitas. El sector de la minería del oro, que tiene vínculos internacionales, desempeña un papel clave en los delitos financieros, en particular a través de actores guyaneses. Los bancos, las empresas de tecnología financiera y las de cambio de divisas facilitan estas operaciones y algunas instituciones se dedican principalmente a las finanzas ilícitas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Brasil se enfrenta a retos persistentes en la lucha contra el crimen organizado, con niveles de violencia letales, comparables a los de las zonas en conflicto. Aunque en el 2024 registró el índice de homicidios más bajo en más de una década, el país sigue liderando las cifras absolutas y la violencia se sigue concentrando en estados como Bahía. Los índices de condenas por homicidio siguen siendo bajos y la actividad de las bandas sigue aumentando la criminalidad, especialmente en los centros urbanos y en la Amazonía. La actual administración ha dado prioridad a la seguridad, ha revertido la desregulación de las armas de fuego y ha puesto en marcha programas específicos para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y los delitos ambientales. Algunas iniciativas, como el Programa Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y el Programa de Acción en Seguridad, tienen por objeto mejorar el mantenimiento del orden y la cooperación judicial. Los cuerpos de seguridad

federales también se han centrado en frenar la extracción ilegal de oro y el contrabando. A pesar de estas medidas, la violencia policial ha aumentado en algunas regiones y las redes del crimen organizado mantienen un control territorial importante.

La corrupción es un problema grave y los enredos políticos limitan la aplicación de la ley contra los grupos delictivos. La influencia de las milicias en la gobernanza local y la interferencia electoral de las organizaciones delictivas debilitan el Estado de derecho. A pesar de los marcos normativos y los sistemas para combatir la corrupción, persisten las deficiencias sistémicas en materia de transparencia y rendición de cuentas. La complicidad institucional, que permite el funcionamiento de las redes criminales, ha empeorado la percepción de la corrupción en el país. Según los informes, hay jueces, fiscales y miembros de los cuerpos de seguridad que están vinculados con el crimen organizado. Las decisiones judiciales, como

la suspensión de multas y la flexibilización de las normas para los cargos políticos, generan más preocupación por los retrocesos. Sin embargo, entre las recientes iniciativas contra la corrupción figuran la anulación de las órdenes de secreto y las reformas fiscales para reducir los sobornos.

Reconociendo la complejidad y la magnitud de la crisis de seguridad, el Gobierno brasileño ha comenzado a movilizar el apoyo internacional. Se están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para involucrar a los países vecinos y a los socios mundiales en el desarrollo de un enfoque coordinado y estratégico para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. Las operaciones conjuntas con los cuerpos de seguridad europeos han dado lugar a detenciones relacionadas con el tráfico de drogas. En agosto del 2023, Brasil reactivó una organización de tratados regionales para mejorar los esfuerzos multilaterales contra la minería y la tala ilegales, aunque siguen existiendo lagunas en la lucha contra los delitos ambientales. Los acuerdos con Paraguay, Alemania, Ecuador, China y Francia se centran en el tráfico de drogas y el de armas, el lavado de dinero y la deforestación ilegal. En el 2023 se creó un organismo de cooperación policial continental, en el que Brasil ocupa una posición de liderazgo.

A pesar de las limitaciones de Brasil en materia de cuerpos de seguridad federales, la actual administración promulgó medidas de seguridad en su primer año. El endurecimiento del control de armas redujo el acceso de los civiles a las armas de fuego, aumentó los impuestos y restringió determinadas armas. Las medidas contra la minería ilegal expulsaron a los mineros, reforzaron la aplicación de la ley y mejoraron la transparencia del comercio del oro. Una iniciativa de seguridad estableció 34 puestos policiales en la Amazonía para combatir el tráfico de drogas y los delitos ambientales. Un programa nacional impulsó la vigilancia policial, la cooperación entre organismos y la seguridad fronteriza. Un decreto del 2023 reforzó la coordinación federal y la militar contra el crimen organizado. Gracias a unas leyes más estrictas contra la trata de personas, aumentaron las penas, en consonancia con los protocolos internacionales. Las leyes sobre los delitos contra las especies silvestres siguen siendo obsoletas, mientras que las políticas sobre las drogas son objeto de debates jurídicos. Las nuevas regulaciones se centran en las drogas sintéticas, la ciberdelincuencia, la corrupción y los delitos financieros.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque el Poder Judicial brasileño mantiene su independencia en varios ámbitos, se enfrenta a problemas de ineficiencia, a presiones externas y a una supervisión limitada, especialmente en las zonas rurales. Los fiscales rara vez investigan las conductas indebidas de la Policía, lo que da lugar a una cultura generalizada de impunidad. Los informes sobre la corrupción judicial, que incluyen a jueces vinculados a organizaciones criminales, debilitan aún más la integridad institucional. El sistema penitenciario, uno de los más grandes del mundo, está superpoblado y profundamente infiltrado por el crimen organizado, lo que lo convierte en un terreno fértil para el

reclutamiento de facciones criminales. Hay grupos criminales en la mayoría de los estados, que influyen tanto dentro como fuera de las paredes de las prisiones. A pesar de algunas medidas, como la creación de una Policía Penitenciaria Nacional, las autoridades se enfrentan a retos persistentes para controlar el crimen organizado en las prisiones.

El sistema de seguridad pública de Brasil presenta profundos problemas estructurales, ya que los miembros de los cuerpos de seguridad suelen estar implicados en las actividades criminales. La corrupción policial y la falta de supervisión contribuyen a que se generalicen las conductas indebidas, como las ejecuciones extrajudiciales y la connivencia con las milicias. En los casos en los que el Gobierno ha emprendido medidas legales contra la trata de personas y la ciberdelincuencia, el enfoque militarizado del mantenimiento del orden ha dado lugar a enfrentamientos violentos y a constantes abusos de poder. Las divisiones institucionales entre la Policía Militar y la Civil agravan la ineficacia. La confianza de la población sigue siendo escasa, porque se perciben la parcialidad política, la falta de financiación y las disparidades raciales sistémicas. A pesar de los intentos de reforzar los cuerpos de seguridad, los grupos delictivos de muchas zonas siguen estando mejor equipados que las autoridades.

El crimen organizado es un problema importante en Brasil, especialmente en las regiones fronterizas, las ciudades y los puertos marítimos. Las vastas fronteras terrestres y fluviales, que no están vigiladas, facilitan las actividades ilícitas. Las densas selvas y las redes fluviales del Amazonas facilitan el crimen organizado. Las zonas de triple frontera sirven de centros para el crimen transnacional, como la minería ilegal y los delitos ambientales. Las organizaciones criminales aprovechan las vías navegables, que están mal vigiladas, para transportar las mercancías ilícitas y hay puertos, como Porto Vila do Conde, que se vinculan con el tráfico de drogas. La Amazonía es ahora un foco de delincuencia y aumenta la violencia en municipios claves.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Brasil ha establecido un marco jurídico e institucional, liderado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para combatir el lavado de dinero mediante estrategias nacionales, programas de formación y unidades especializadas. Sin embargo, persisten los retos, en particular en lo que respecta a los sistemas de lavado vinculados a la corrupción, que utilizan métodos basados en el comercio y las transferencias informales. La aplicación de la ley ha mejorado, pero los procesos judiciales son lentos y la falta de coordinación dificulta su eficacia. Las recientes regulaciones destinadas a frenar los flujos financieros ilícitos en las transacciones de oro requieren una supervisión y un cumplimiento más estrictos por parte de las instituciones mineras y financieras.

Los altos niveles de criminalidad y de violencia que hay en Brasil son factores disuasorios importantes para la inversión. El difícil entorno empresarial también incluye una compleja

normativa fiscal y una fuerte intervención del Estado en la economía. Se han restablecido las políticas económicas desmanteladas por la administración anterior y una reciente reforma fiscal pretende reforzar la supervisión federal y frenar la evasión fiscal. Las agencias reguladoras a nivel federal mantienen una fuerte supervisión en sectores clave, aunque los reguladores estatales son más vulnerables a la influencia delictiva.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El marco de asistencia a las víctimas de la trata de personas en Brasil sigue estando fragmentado, con importantes lagunas en los servicios de protección y de apoyo. El país carece de una base de datos centralizada, lo que dificulta el seguimiento de las víctimas y la evaluación de la eficacia de los servicios. Son múltiples los organismos que recopilan datos sobre las víctimas, pero la falta de uniformidad en las metodologías limita la coordinación. No existen refugios especializados ni financiación para el apoyo a largo plazo a las víctimas a nivel federal. Por el contrario, las víctimas dependen de unos servicios generales, como la atención sanitaria y los programas de alfabetización, que varían según la ubicación. São Paulo cuenta con dos refugios para víctimas de la trata. Las políticas nacionales en materia de drogas abarcan la promoción de la salud relacionada con las drogas, la intervención temprana, el tratamiento, la integración social de las comunidades marginadas y el apoyo a la recuperación. El programa federal de protección de testigos cubre a un pequeño número de personas cada año, pero carece de directrices claras para los participantes que desean mantener el anonimato.

El enfoque actual del crimen organizado da prioridad a la represión sobre la prevención, con campañas de sensibilización limitadas que abordan la trata de personas, la trata con fines sexuales o el turismo sexual infantil. Las iniciativas localizadas han reducido la violencia, pero hacen falta estrategias más amplias. En agosto del 2024, Brasil introdujo un nuevo plan nacional contra la trata con fines de trabajo

forzoso y explotación sexual, junto con nuevas unidades de lucha contra la trata. Las campañas de prevención de las drogas son objeto de críticas por su enfoque represivo y por la falta de estrategias basadas en datos empíricos. El Gobierno está estudiando la posibilidad de llevar a cabo intervenciones sociales en la Amazonía, pero su impacto sigue siendo incierto. El Banco Central ha introducido medidas de seguridad reforzadas, que incluyen nuevas normas para mejorar la prevención del fraude mediante la reducción de la asimetría de la información. Algunos informes recientes han encontrado deficiencias en la protección de los denunciantes en Brasil, en particular para los empleados del sector privado que denuncian sobornos en el extranjero.

El espacio cívico es relativamente abierto, pero las ONGs que trabajan en el ámbito de los derechos sobre la tierra y la protección del medioambiente se enfrentan a riesgos importantes, como acoso y violencia. Los activistas medioambientales y los periodistas que investigan actividades ilegales en la Amazonía son los más vulnerables. Al aumentar la presencia del crimen organizado en esa zona, las comunidades indígenas también sufren graves amenazas. Los organismos internacionales han expresado su preocupación por las violaciones de los derechos, en particular los de las poblaciones indígenas y los afrodescendientes. La libertad de prensa se ve amenazada por los ataques a los periodistas y también por la concentración de los medios de comunicación y la desinformación, a pesar de que han mejorado las relaciones con el Gobierno. Mientras el Estado investiga la violencia policial y la corrupción, la sociedad civil desempeña un papel fundamental en la investigación de la prevención del delito, ya que las autoridades siguen mostrándose reacias a las aportaciones externas.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.